

**AMPARO DIRECTO 33/2018**

**QUEJOSA: FRANCISCA SOLÍS CASTILLO**  
**QUEJOSO ADHESIVO: INSTITUTO DE**  
**SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE**  
**LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE**  
**SONORA Y OTROS**

**PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.**  
**SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DIAZ**  
**SECRETARIA AUXILIAR: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ**  
Colaboró: Jeraldyn Gonsen Flores

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

**Vo. Bo.**  
**Ministro:**

**VISTOS y**  
**RESULTANDO:**

**Cotejó:**

1. **PRIMERO.** Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, Francisca Solís Castillo, a través de su apoderada Karla Angélica Quijada Chan, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil diecisiete en el juicio del servicio civil 916/2016 del índice del referido tribunal.

## AMPARO DIRECTO 33/2018

2. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 5, 14, 16, 17, 31, fracción IV y 123, Apartado B), fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Los puntos resolutivos de la sentencia reclamada fueron:

*“PRIMERO. No han procedido las acciones intentadas por FRANCISCA SOLIS CASTILLO, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y del Gobernador del Estado de Sonora y de la Universidad de Sonora.*

*SEGUNDO. Se absuelve a los demandados de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora, por las razones expuestas en el Considerando IV.*

*TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.”*

4. **SEGUNDO.** La demanda se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, cuyo Presidente la registró con el número de expediente 830/2017. Mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete declinó su competencia para conocer del asunto.
5. Posteriormente, se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, quien por auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete el presidente lo admitió, registró con el número de expediente **D.A. 452/2017** y tuvo como terceros interesados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON); la Secretaría de

Hacienda del Estado de Sonora; Gobernadora del Estado de Sonora; y a la Universidad de Sonora (UNISON).

6. Posteriormente, por proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo adhesivo promovida por la Universidad de Sonora, por conducto de su apoderado legal Gildardo Estrella Álvarez y en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito emitió resolución que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

***“ÚNICO.** Se solicita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN, para conocer y resolver el planteamiento formulado en el presente juicio de amparo directo y sus relacionados.”*

7. **TERCERO.** Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, la registró con el número 395/2018, ordenó su radicación en la Segunda Sala de este Alto Tribunal y lo turnó para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas.
8. En sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho, por unanimidad de cinco votos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo directo **452/2017** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
9. **CUARTO.** Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar

## **AMPARO DIRECTO 33/2018**

el amparo directo atraído con el número 33/2018 y turnar el expediente para su estudio al Ministro Eduardo Medina Mora I.

10. **QUINTO.** En proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Segunda Sala tuvo por recibidos los autos del amparo directo 33/2018, así como la demanda de amparo adhesivo promovida por el apoderado legal de la Universidad de Sonora; determinó que esta Sala se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos al Ministro ponente.
11. **SEXTO.** El proyecto de sentencia con el que se propuso resolver el presente asunto fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de normas generales; y,

### **C O N S I D E R A N D O:**

12. **PRIMERO. Competencia.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013.
13. Lo anterior, en virtud de que se trata de un juicio de amparo directo cuya atracción se determinó mediante sentencia de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción

395/2018 y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.

14. **SEGUNDO. Certeza y precisión del acto reclamado.** Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, consistente en la sentencia de quince de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente del juicio del servicio civil **916/2016**.
15. **TERCERO. Oportunidad de la demanda principal y adhesiva.** Es innecesario realizar el estudio relativo a la oportunidad de las demandas de amparo principal y adhesiva, toda vez que fue analizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, como se advierte de la foja 229 de los autos del expediente DA 452/2017.
16. **CUARTO. Legitimación.** El juicio de amparo fue promovido por parte con legitimación para ello, en virtud de que la demanda fue presentada por Karla Angélica Quijada Chan, apoderada<sup>1</sup> de Francisca Solís Castillo, quien tiene el carácter de parte actora en el juicio del que deriva la sentencia reclamada.
17. A su vez, se reconoce legitimación a Gildardo Estrella Álvarez, apoderado de la Universidad de Sonora al promover el amparo adhesivo, por ser una de las partes en el procedimiento en el que emanó la resolución de origen.

---

<sup>1</sup> Personalidad que tiene acreditada a través de la carta poder visible a foja 11 del juicio de origen 916/2016, el cual le fue reconocida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 17 a 18 del juicio de origen).

18. **QUINTO. Antecedentes.** De las constancias que integran el expediente, se advierte que los hechos relevantes que dieron origen al presente juicio de amparo son:
19. 1. Francisca Solís Castillo laboró por treinta y cinco años en la Universidad de Sonora, en los que cotizó para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).
20. 2. El veintisiete de febrero de dos mil quince, el ISSSTESON emitió un dictamen a través del cual le concedió la jubilación a la trabajadora por \*\*\*\*\*, supuestamente equivalente al último sueldo íntegro devengado como se desprende del considerando siete y el punto resolutivo primero de dicho dictamen.
21. 3. Inconforme con lo anterior, Francisca Solís Castillo el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentó demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, hoy Tribunal de Justicia Administrativa, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores; del Gobernador; la Universidad; y, la Secretaría de Hacienda, todos ellos del Estado de Sonora, respecto de la rectificación del monto de su pensión mensual a efecto de incluir todas las prestaciones que comprendían el último salario integrado que recibió en su vida laboral, es decir, que no se le tomara solo el sueldo presupuestal devengado, así como que se pagaran al Instituto referido las cuotas y aportaciones omitidas de enterar en perjuicio de la parte actora.

22. 4. Dicha demanda fue radicada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora con el número 916/2016 en el que todos los demandados plantearon excepciones y defensas; se admitieron pruebas; se celebró la audiencia de pruebas y alegatos; y finalmente, se dictó sentencia el quince de agosto de dos mil diecisiete, en el que se declaró improcedente la acción y se absolvió a las demandadas de las prestaciones reclamadas.
23. Lo anterior pues, en el dicho del tribunal de la correcta interpretación de los artículos 15, 73 y demás relativos de la Ley del ISSSTESON para la determinación del monto de la pensión que otorga el Instituto ya sea por jubilación o cualquiera de los supuestos previstos en la Ley, sólo deberá tomarse en cuenta el sueldo o salario respecto del cual se aportó la cotización a que se refiere el artículo 16 de dicha ley.
24. Asimismo, indicó que aun cuando el concepto de sueldo presupuestal es muy amplio e incluye una diversidad de percepciones no pueden ser incluidas para la determinación de la pensión otros conceptos por los que no se realizó la respectiva aportación, apoyándose en la jurisprudencia 2a./J. 41/2009, de rubro: "*PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA INTEGRA LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE LA CONSIDERÓ PARA CUBRIR EL MONTO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES EFECTUADAS AL ISSSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).*"

## AMPARO DIRECTO 33/2018

25. 5. En contra de lo anterior, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Karla Angélica Quijada Chan, apoderada de Francisca Solís Castillo, promovió juicio de amparo directo, del que originalmente conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quien se declaró incompetente por razón de la materia y remitió el asunto a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
26. 6. Por razón de turno conoció de la demanda de amparo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, quien la admitió y registró con el número de expediente **D.A. 452/2017**. Tuvo como terceros interesados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON); la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; Gobernadora del Estado de Sonora; y la Universidad de Sonora (UNISON).
27. 7. Mediante oficio 191/2018-A recibido el uno de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito remitió los autos del amparo a fin de solicitar a este Alto Tribunal ejercer la facultad de atracción del asunto.
28. 8. Por auto de trece de junio de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, la registró



con el número 395/2018, la cual en sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho, por unanimidad de cinco votos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo directo **452/2017** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

29. 9. Ahora bien, en la demanda de amparo, la quejosa en síntesis, hizo valer los siguientes conceptos de violación:

29.1. **1. Se vulneró el derecho humano de seguridad jurídica, el de tutela judicial efectiva y garantía de legalidad, al realizar una ilegal distribución de la carga probatoria.**

Que se le impuso de forma incorrecta la carga probatoria relativa a demostrar que las prestaciones que conforman el último sueldo íntegro, previamente fueron objeto de cotización ante el ISSSTESON, siendo que esa carga le corresponde al patrón en carácter de pagador -Universidad de Sonora y Secretaría de Hacienda del estado de Sonora-.

29.2. **2. Se vulneró la garantía de legalidad, respecto al principio de debida fundamentación y motivación al aplicar indebidamente el artículo 73 de la Ley número 38 del ISSSTESON.**

Que se le aplicó indebidamente el artículo 73 de la Ley número 38 del ISSSTESON ya que sólo prevé a las pensiones y no a las jubilaciones como en el caso acontece.

Que la autoridad responsable tomando en cuenta dicho artículo negó la rectificación de su pensión, pues sólo se consideran los sueldos sobre los cuales el trabajador y el patrón hayan aportado al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto.

29.3. **3. Es inconstitucional el artículo 73 de la Ley 38 del ISSSTESON, al trasgredir la seguridad jurídica en lo referente a la garantía de certeza jurídica.**

Que el contenido del artículo 73 de la Ley 38 del ISSSTESON es inconstitucional al establecer que para incluir en el cálculo de la pensión todos los sueldos devengados por el trabajador durante el

periodo de contabilización, establece como condición que el patrón entregara las aportaciones obligatorias que le corresponden, es decir, que dicho artículo condicione para el cálculo correcto de la Jubilación el considerar sólo los sueldos y emolumentos respecto de los que el patrón haya aportado genera incertidumbre jurídica.

- 29.4. **4. Es inconstitucional el artículo 73 de la Ley 38 del ISSSTESON, al trasgredir la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV constitucional.**

Que el artículo 73 de la Ley 38 del ISSSTESON no precisa quien será el sujeto obligado para las aportaciones a las que hace referencia pues podría interpretarse aportaciones patronales o el conjunto de éstas con las cuotas del trabajador, contribuciones que, cumplen con los efectos establecidos en el Código Fiscal para el Estado de Sonora.

- 29.5. **5. Se vulneró la garantía de legalidad al aplicar la jurisprudencia 2a./J.41/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.**

Resulta inaplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala, pues refiere que conforme a la Ley del ISSSTE vigente hasta el año dos mil siete, demostrar que un trabajador percibió el concepto “compensación garantizada” no es suficiente para considerar que forma parte del sueldo básico que se utilizará para el cálculo de una pensión o jubilación, por lo que es inaplicable al caso que aquí acontece, dado que los regímenes de pensiones y jubilaciones del ISSSTE e ISSSTESON son distintos.

- 29.6. **6. Se vulneró la tutela judicial efectiva, en lo referente al principio de exhaustividad y su garantía de legalidad, al efectuar una valoración deficiente de las pruebas ofrecidas.**

La responsable hizo una valoración deficiente de las pruebas documentales ofrecidas -talones de pago de las últimas dos quincenas- pues indicó que a través de las mismas se advertía que no cotizó ni aportó al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTESON, otorgándole a las mismas valor probatorio en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil y los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo.

Vulnerando así la tutela judicial efectiva, pues de dichas pruebas se desprende que la percepción total fue por \*\*\*\*\*, sin embargo, la pensión solicitada se otorgó por la cantidad de \*\*\*\*\* con una diferencia de \*\*\*\*\* entre el monto de su jubilación y el que

realmente debió ser, derivado de las prestaciones percibidas en su último sueldo íntegro.

- 29.7. **7. Se vulneró la garantía de legalidad referente al principio de debida fundamentación y motivación, al aplicar indebidamente el artículo transitorio SEXTO del decreto #211.**

Que le fue aplicado de forma incorrecta el artículo sexto transitorio, penúltimo párrafo del Decreto #211 que reformó artículos de la Ley número 38 del ISSSTESON, pues en el dicho de la responsable, al entrar en vigor dicho Decreto contaba con más de 28 años cotizados, por lo que debía recibir su jubilación con base al último salario cotizado.

No se actualiza la hipótesis prevista en dicho artículo transitorio pues, en la fecha de su entrada en vigor -30 de junio de 2005- se había cotizado por un periodo menor al indicado -25 años-, por lo que no resulta aplicable.

- 29.8. **8. Se vulneró la garantía de legalidad en lo concerniente al principio de debida fundamentación y motivación al aplicar indebidamente el artículo 73 de la Ley número 38 del ISSSTESON.**

La indebida aplicación del artículo 73 de la Ley número 38 del ISSSTESON, al considerar que para integrar el “sueldo íntegro” es necesario demostrar que los conceptos que integran ese sueldo fueron objeto de cotización para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTESON, razón por la que se declaró improcedente la rectificación de pensión, pues no se justificó que formaran parte de las cantidades de las cuales cotizaron al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto demandado.

- 29.9. **9. Se vulneró la seguridad jurídica y garantía de legalidad respecto al principio de debida fundamentación y motivación al fijar incorrectamente los extremos de la acción intentada.**

La responsable estableció incorrectamente que para la procedencia de la acción era necesario acreditar que previamente había cotizado respecto de las diferencias que se pretendía fueran incluidas en el cálculo de la jubilación, pues es falso que dicha situación sea esencial para decretar un nuevo cálculo y se aumente una jubilación, dejando de aplicar el artículo 65 de la Ley número 38 del ISSSTESON.

**29.10. 10. Se vulneró el artículo 5 constitucional y la seguridad jurídica al tener por válido que el patrón haya descontado y aportado con base a un sueldo menor al que realmente se devengó.**

La autoridad responsable da por válido que el patrón hizo el registro ante el ISSSTESON con un sueldo integrado menor al que estaba recibiendo en realidad y en términos del artículo 15 de la Ley número 38 del ISSSTESON fue a partir del cual se llevó a cabo el cálculo de su jubilación.

Violando así el contenido de los artículos 5 y 123, Apartado B), fracción XI constitucionales, en los que se establece que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sin que previamente medie una resolución judicial en ese sentido.

Durante el periodo de cálculo de la jubilación, el patrón la tuvo registrada ante el ISSSTESON con un sueldo integrado menor al que en realidad estaba devengado, generando un sueldo regular ponderado, calculando así una jubilación menor al que le corresponde conforme al sueldo real integrado devengado durante el periodo que comprendió la cantidad calculada.

**30. SEXTO. Estudio de fondo.** La quejosa solicita vía conceptos de violación la nivelación o rectificación de la pensión jubilatoria y pago de diferencias -entre otras prestaciones-, reclamadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues considera se debió tomar en cuenta el sueldo base integrado por todas y cada una de las percepciones de carácter permanente que percibió con motivo de su trabajo, en términos del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, contrario a lo que determinó la autoridad responsable al aplicar el contenido del artículo 73 de la citada legislación.

**31.** A efecto de llevar a cabo el análisis de los conceptos de violación expuestos, resulta necesario hacer algunas precisiones al respecto.

32. El artículo 3º, fracción VII de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo de las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución.<sup>2</sup>
33. Conforme a lo anterior, la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, de igual manera, establece en su numeral 70, que las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores se rigen por lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en esa legislación, en los contratos colectivos y en las demás disposiciones en vigor que sean aplicables.<sup>3</sup>
34. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo XVII, artículos 353-J y 353-U, establece los lineamientos bajo los cuales deben regularse las relaciones de trabajo, en las universidades e

---

<sup>2</sup> “Artículo 3o. [...] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;”

<sup>3</sup> Artículo 70.- Las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores se regirán por lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en esta ley, en los contratos colectivos y en las demás disposiciones en vigor que sean aplicables.

## AMPARO DIRECTO 33/2018

instituciones de educación superior autónomas por ley<sup>4</sup>. Además, se advierte que los trabajadores administrativos y académicos, tienen derecho a disfrutar de los sistemas de seguridad social conforme a lo dispuesto en sus leyes orgánicas o de conformidad con los acuerdos que para ello se celebren.<sup>5</sup>

35. En ese sentido, la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece en sus artículos 3 y 4, que el Instituto podrá celebrar convenios con organismos o instituciones públicas a fin de proporcionar a sus trabajadores y a sus familiares las prestaciones de seguridad social, entre las que se encuentran la jubilación.<sup>6</sup>
36. De igual manera, el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, establece que sus trabajadores disfrutarán de los beneficios de seguridad social a través de la institución que se

---

<sup>4</sup> “CAPÍTULO XVII” “Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley” [...]

“Artículo 353-J. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones.”

<sup>5</sup> “Artículo 353-U. Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.”

<sup>6</sup> “ARTICULO 3o.- El Instituto podrá celebrar convenios con las Entidades de la Administración Pública Estatal y con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, así como con organismos o instituciones públicas, con el fin de que sus trabajadores y los familiares derechohabientes de éstos reciban las prestaciones y servicios del régimen de esta Ley. La Junta Directiva del Instituto establecerá los requisitos, condiciones, modalidades y obligaciones, a los que se sujetarán los organismos que decidan incorporarse al régimen de esta Ley. La incorporación podrá ser total o parcial.”

ARTICULO 4o.- Se establecen con el carácter de obligatorias las siguientes prestaciones, salvo la prevención señalada en el párrafo segundo del artículo 3° de esta Ley: [...] VII.- Jubilación; [...]

determine de común acuerdo con las autoridades de la Universidad y en los términos previstos por los ordenamientos legales y los acuerdos o convenios suscritos<sup>7</sup>.

37. Al respecto, el 31 de marzo de 1990, la Universidad en cita celebró un contrato de prestaciones con el ISSSTESON, a efecto de que se otorgaran a sus trabajadores las prestaciones y servicios consignados en dicha legislación. Dicho contrato establece, en lo que interesa, lo siguiente:

***“PRIMERA. “ISSSTESON” se obliga a otorgar de conformidad con la Ley No. 38 reformada, los Reglamentos en vigor y el presente Convenio, las siguientes prestaciones: Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, Seguros de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Servicio de Reeducción y Readaptación de Invalidez, actividades que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia, Préstamos a Corto Plazo, Préstamos Prendarios para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero, Jubilaciones, Pensión por Vejez, Pensión por Invalidez, Pensión por Muerte, Indemnización Global, Pago Póstumo, Fondo Colectivo de Retiro y Pensión Mínima, a los trabajadores que “LA UNIVERSIDAD” tiene a su servicio.”***

***“SEGUNDA. Como contraprestación, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar el 26% del sueldo básico integrado del trabajador y el 0.3% sobre el salario mínimo general mensual vigente en esta capital; porcentajes que se integrarán de la siguiente manera: 20% que pagará “LA UNIVERSIDAD” y se***

---

<sup>7</sup> Artículo 72.- Los empleados y trabajadores al servicio de la Universidad disfrutarán de los beneficios de la seguridad social a través de la institución que se determine de común acuerdo con las autoridades de la Universidad y en los términos previstos por los ordenamientos legales y los acuerdos o convenios suscritos.

*aplicará de la siguiente forma: 10% Servicios Médicos; 4% Pensiones y Jubilaciones; 0.5 Préstamos a Corto Plazo; 0.5% Préstamos Prendarios; 0.4% Indemnización Global; 0.1 Ayuda de Funeral; 2% Pensión Mínima y 2.5% Gastos de Administración. El restante 6% lo pagará el trabajador por conducto de la “LA UNIVERSIDAD” y se aplicará de la siguiente manera: 1% Servicios Médicos; 4% Jubilaciones y Pensiones; 0.5% Préstamos a Corto Plazo; 0.5% Préstamos Prendarios: el 0.3% del salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado de Sonora, será cubierto en los términos que establece el artículo 91-B de la Ley número 38 reformada del “ISSSTESON”. Por aportaciones de 0.15% que harán tanto “LA UNIVERSIDAD” como sus trabajadores. [...]” (Fojas 99 a 106)*

38. Asimismo, con motivo de dicho contrato, el 31 de agosto de 1990, ambas instituciones firmaron un diverso contrato a fin de puntualizar las obligaciones contraídas, en el cual se indicó dentro del rubro de declaraciones, esencialmente, lo siguiente:

*“I. Ambas partes reconocen que tienen celebrado un contrato de prestación de servicios, fechado el 31 de marzo de 1990.  
I. En el Contrato a que se refiere la Declaración anterior, se estableció que la Universidad de Sonora se obliga a pagar al Instituto mensualmente, el 26% del sueldo básico integrado del trabajador, entendiéndose éste por la suma del sueldo y el complemento, más el 0.3% sobre el salario mínimo general mensual vigente en esta ciudad capital.” (Fojas 108 a 110)*

39. De lo expuesto, se advierte que la Universidad de Sonora y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, celebraron diversos contratos a fin de que esta última Institución, proporcionara los servicios de seguridad social a sus trabajadores, de entre los cuales destaca el relativo a las jubilaciones.



40. Asimismo, se indicaron cuáles serían los montos que, como contraprestación (aportaciones) la citada Universidad debería pagar al Instituto, a efecto de que le fueran concedidas a sus trabajadores las prestaciones reguladas por dicha Institución, así como los conceptos que integrarían el “sueldo básico integrado”, para el otorgamiento de las pensiones respectivas.
41. Al efecto, se estipuló que la Universidad se obligaba a pagar el porcentaje del “sueldo básico integrado” del trabajador, entendiéndose por éste la suma del sueldo y el complemento, más el 0.3% sobre el salario mínimo general mensual vigente.
42. Ahora bien, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a fin de proporcionar las prestaciones a que se aluden, establece en el tercer párrafo del artículo 15 de su legislación que, tratándose de trabajadores de organismos públicos incorporados, el sueldo básico que se debe tomar en cuenta, es aquél que se determine de manera particular en los convenios que se celebren, el cual estará sujeto a las cotizaciones que deban realizarse a la Institución. Al efecto se transcribe el numeral en cuestión:

***“Artículo 15.- El sueldo que se tomará como base para los efectos de esta Ley, se integrará con el sueldo presupuestal y los demás emolumentos de carácter permanente que el trabajador obtenga por disposición expresa de las leyes respectivas, con motivo de su trabajo.***

El sueldo básico integrado por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeto a las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley y se tomará en cuenta para la determinación del monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que la misma establece.

El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos incorporados se determinará en cada caso particular mediante los convenios que celebren con el Instituto, en los términos del párrafo segundo del artículo 3° de esta Ley.”

43. Asimismo, en los numerales 16 y 21 de la referida legislación, se indican cuáles son los porcentajes que por concepto de aportaciones se deben hacer a la Institución a fin de cubrir las prestaciones reguladas. Los citados artículos indican lo siguiente:

**“Artículo 16.-** Todo trabajador al servicio del Estado deberá aportar la cuota obligatoria del 17.5% sobre el sueldo básico integrado que devengue, definido en el primer párrafo del artículo anterior; aplicándose dicha cuota de la siguiente manera: [...]

**“Artículo 21.-** El Estado cubrirá al Instituto por vía de aportaciones el 29.5% sobre el sueldo básico integrado de los trabajadores según éste se define por el artículo 15 de esta Ley [...]”

44. De las anteriores disposiciones se advierte, en lo que interesa, que tratándose de los trabajadores de la Universidad de Sonora incorporados al Instituto, para determinar el monto que por seguros, pensiones, subsidios y préstamos corresponda, debe tomarse en

cuenta el sueldo básico integrado, previamente estipulado (sueldo, complemento), el cual está sujeto a las cotizaciones establecidas.

45. Ahora bien, en ese sentido, el artículo 73 de la referida legislación establece que, para el pago de las pensiones que otorga dicha Institución, se deberá tomar en cuenta el sueldo percibido, respecto del cual se hayan realizado las aportaciones correspondientes. De manera textual cita lo siguiente:

**“Artículo 73.- Para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, se tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos, y, a partir del 1 de enero de 1949, sólo se considerarán aquellos sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes.**

*Todas las pensiones que otorgue el Instituto se calcularán sobre la base del sueldo regulador que define el artículo 68 de esta Ley.*

*[...]”*

46. De dicho numeral se advierte que, solo se tomaran en cuenta para fijar el monto de las pensiones, el sueldo percibido respecto del cual se hubiera hecho la aportación respectiva al Fondo de Pensiones.
47. Al respecto, esta Segunda Sala, al analizar la contradicción de tesis 28/2009, sostuvo que tratándose de la pensión jubilatoria de los Trabajadores al Servicio del Estado, la compensación garantizada integra la base salarial para su cálculo, siempre y cuando la

dependencia o entidad correspondiente la hubiera considerado para cubrir el monto de las cuotas y aportaciones efectuadas al ISSSTE.

48. Lo indicado, ya que no basta con acreditar que se percibió dicha compensación sino que además, es necesario que dicho concepto haya formado parte del salario respecto del cual se realizaron las aportaciones correspondientes, pues entre ambas debe existir una correlación para que el régimen funcione adecuadamente. De ahí que el monto de las primeras debe ir en congruencia con las referidas aportaciones y cuotas, máxime si se tiene en cuenta que tales recursos se obtienen los fondos para cubrirlas.
49. Así se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 41/2009, cuyo rubro señala lo siguiente: *“PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA INTEGRA LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE LA CONSIDERÓ PARA CUBRIR EL MONTO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES EFECTUADAS AL ISSSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).”*
50. Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto es posible advertir que la Universidad de Sonora es un organismo público, el cual tiene facultades para celebrar convenios con diversas instituciones.
51. Que de conformidad con esas atribuciones, celebró contrato de prestación de servicios con el Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora a fin de que éste le proporcionara las prestaciones de seguridad social a sus trabajadores, conforme a las cuotas y aportaciones que, tanto los trabajadores como la misma universidad, debían aportar a la citada Institución con la finalidad de sufragar el pago de las pensiones que otorga.

52. Asimismo, se advierte que el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que tratándose de los trabajadores de los organismos públicos incorporados al Instituto, el sueldo básico que se debe tomar en cuenta debe ser aquel que se determine de manera particular conforme a los convenios que se celebren, en términos de lo que dispone el artículo 3° de la legislación que lo regula.
53. Al efecto, ambas instituciones en los contratos que celebraron, acordaron señalar que el “sueldo básico integrado”, que serviría de base para determinar el monto que por seguros, pensiones, subsidios y préstamos que se debían otorgar, se compondría por el concepto de sueldo complemento.
54. Asimismo, se comprometieron al pago de las aportaciones respectivas a fin de cubrir las prestaciones de seguridad social.
55. De ahí que si la Universidad de Sonora y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, conforme a lo que establece el artículo 3 referido, celebraron

contratos de prestaciones mediante los cuales se comprometieron, por un lado, a otorgar los beneficios de seguridad social y, por otro, a pagar las contribuciones conforme a los montos por las cuotas y aportaciones indicadas, es evidente que el sueldo que debe tomarse en cuenta para el cálculo de las prestaciones a que tienen derecho sus trabajadores, es precisamente el pactado (artículo 15, tercer párrafo) y conforme al cual se realizaron las aportaciones correspondientes.

56. Por lo que en ese sentido, si ambas instituciones fijaran los lineamientos para el otorgamiento de las prestaciones, aunado a que el artículo 73 de la citada legislación, dispone que para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, **debe tomarse en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos respecto de los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes**, es claro que con independencia a que en el sueldo se integren diversos conceptos, éstos no puede tomarse en cuenta si no formaron parte de las aportaciones realizadas.
57. Consecuentemente, resulta improcedente la rectificación en el monto de la jubilación que se solicite de conformidad con la totalidad de los conceptos percibidos por el trabajador al momento en que se encontraba en activo. Ya que para efectos del cálculo de la misma, únicamente debe tomarse en cuenta el sueldo íntegro (en este caso el convenido entre las instituciones) y respecto del cual se hicieron las aportaciones al Fondo de Pensiones, pues exigir un pago en base a un salario distinto a aquel que cotizó pondría en riesgo la estabilidad

financiera de la Institución y, en consecuencia, carecería de los fondos necesarios para lograr sus objetivos.

58. Una vez precisado lo anterior, corresponde llevar a cabo el análisis de los conceptos de violación, los cuales se agruparan conforme a su temática para un mejor estudio.
59. La quejosa señala que la determinación de la responsable al aplicar el artículo 73 de la Ley del ISSSTESON vulneró el contenido de los artículos 5° y 123, Apartado B), fracción XI constitucionales, en los que se establece que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sin que previamente medie una resolución judicial, ya que si la jubilación se concede con motivo del producto del trabajo de toda una vida, por lo tanto, ésta debe fijarse acorde a lo devengado en realidad, es decir, conforme a las cantidades que efectivamente devengaba como producto de su trabajo.
60. Además, que se transgrede el principio de seguridad social, ya que tuvo por válido que el patrón la tuviera registrada ante el ISSSTESON con un sueldo integrado menor al que en realidad estaba devengado, calculando así una jubilación menor a la que correspondía.
61. El concepto de violación es **infundado**.
62. En efecto, en principio cabe señalar que con la aplicación de dicha norma general no se transgrede el derecho a la seguridad social, pues

no implica un menoscabo en los derechos de la quejosa que son exigibles conforme a ese derecho humano.

63. Lo indicado, ya que en relación con el monto que integran las pensiones, existen precedentes de esta Suprema Corte Justicia que permiten dilucidar la cuestión planteada.
64. De manera reiterada, esta Segunda Sala ha determinado que la no inclusión de todos los conceptos de ingreso que se perciban en activo en el salario base para calcular la cuota pensionaria, no contraviene los derechos humanos a la seguridad social, a una vida digna y la salud, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, pues ese beneficio no tiene por objeto sustituir de manera íntegra y equivalente el ingreso que aquél percibía.
65. Al respecto esta Segunda Sala ha emitido los siguientes criterios:

**66. ISSSTE. LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup> Jurisprudencia 2a./J. 8/2015 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1528. Registro: 2008423.*



67. *PENSIONES. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR NO INCLUYA TODOS LOS INGRESOS QUE ORDINARIAMENTE PERCIBE EL TRABAJADOR EN ACTIVO EN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, NO CONTRAVIENE EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.*<sup>9</sup>

68. *PENSIONES. LA EXCLUSIÓN DE ALGUNAS PRESTACIONES QUE ORDINARIAMENTE PERCIBE EL TRABAJADOR EN ACTIVO EN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, NO VULNERA POR SÍ SOLA EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA, A LA SALUD Y A LA ALIMENTACIÓN.*<sup>10</sup>

69. *ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD NI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.*<sup>11</sup>

70. De ahí que el hecho de que la responsable haya determinado la improcedencia en la rectificación en el pago de su jubilación conforme a la totalidad de las remuneraciones de la trabajadora cuando se encontraba en activo, no resulta en sí misma contraria al derecho a la

---

<sup>9</sup> Jurisprudencia 2a./J. 11/2015 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1574. Registro: 2008508.*

<sup>10</sup> Jurisprudencia 2a./J. 12/2015 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1575. Registro: 2008509.*

<sup>11</sup> Jurisprudencia 2a./J. 36/2016 (10a.). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1060. Registro: 2011241.*

seguridad social, y por ende los argumentos en ese sentido resultan infundados.

71. Asimismo, tampoco existe una transgresión al contenido del artículo 5° constitucional, ya que si bien el citado numeral regula que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, también lo es que de su texto no se desprende el derecho a recibir una pensión por jubilación después de que ha concluido la relación laboral, pues en éste únicamente se prevé el derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios prestados por una persona, es decir, constituye una garantía respecto del producto del trabajo actual y no así respecto de una garantía futura como lo es el derecho a la jubilación.
72. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XVIII/2001, cuyo rubro cita lo siguiente: *“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTELEÓN QUE PREVEÉ EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR SU MONTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL.”*
73. Aunado a que, como ya se analizó, en el caso no se le está privando de recibir una jubilación conforme al salario percibido, pues éste se calculó conforme a las aportaciones que respecto de su salario íntegro se realizaron y que fueron motivo de cotización para el Fondo de Pensiones.

74. Por otra parte, la quejosa señala que se vulneró el derecho humano de tutela judicial efectiva y garantía de legalidad, toda vez que indebidamente se le impuso la carga probatoria a fin de demostrar que las prestaciones que conforman su último sueldo íntegro, previamente fueron objeto de cotización ante el ISSSTESON, cuando dicha circunstancia debe ser acreditada por la parte patronal, con lo cual se inobserva el contenido de los artículos 784, fracciones XII y XIV, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo.
75. Asimismo menciona, que se hizo una valoración deficiente de las pruebas documentales ofrecidas -talones de pago de las últimas dos quincenas- pues indicó que a través de las mismas se advertía que no cotizó ni aportó al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTESON; con lo que se vulnera la tutela judicial efectiva, pues de con dichas pruebas se pretendía demostrar cuál era su percepción total, a fin acreditar el pago de las diferencias existentes entre la jubilación que se le otorgó y la que le correspondería.
76. Además, que la responsable estableció incorrectamente la litis al fijar cuáles eran los extremos de la acción intentada, pues estableció que para la procedencia de la acción era necesario acreditar que previamente había cotizado respecto de las diferencias que se pretendían fueran incluidas en el cálculo de la jubilación, sin que dicha circunstancia fuera esencial para decretar un nuevo cálculo, ya que en caso de adeudo de aportaciones, el Instituto tiene la facultad de cobrarlo en términos de lo que dispone el artículo 65 de la Ley número 38 del ISSSTESON.

77. Por lo que en ese sentido, señaló resultaba aplicable el contenido de la tesis 2ª./J. 38/2014 de rubro: *“SEGURO SOCIAL. ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN DERIVADA DE LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE REALMENTE PERCIBÍA Y SOLO ESTA CONDICIONADO AL LÍMITE SUPERIOR QUE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997 Y 28 DE LA LEY EN VIGOR”*.
78. Tales argumentos resultan **infundados**.
79. Lo anterior, ya que la responsable no le impuso la carga probatoria a efecto de demostrar que las prestaciones que conformaron su último sueldo íntegro fueron objeto de cotización. Ello, pues al respecto se indicó que para cuantificar el monto relativo a la jubilación era necesario tomar en cuenta el monto respecto del cual se realizaron las cotizaciones, pues solo debían considerarse aquellas percepciones o emolumentos sobre los que se hubiera realizado el pago de las aportaciones correspondientes, sin que con ello le haya impuesto carga probatoria alguna a la parte trabajadora y, por tanto, no se contraviene lo dispuesto en los artículos 784, fracciones XII y XIV, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo.
80. De igual manera, tampoco le asiste la razón a la quejosa al señalar que la responsable establece incorrectamente los aspectos que conforman la litis planteada, además de que hace una indebida

valoración de los recibos de pago que ofreció en autos, al no haberles dado pleno valor probatorio para demostrar cuál era el último sueldo íntegro que devengó.

81. Lo indicado, ya que la responsable sí se pronunció en relación a los aspectos que conformaron la litis, esto es, en relación a la procedencia o no de la solicitud de rectificación de la pensión por jubilación otorgada además, consideró para tal efecto, las diversas pruebas ofrecidas en autos por las partes, entre las cuales se encuentran los citados recibos de pago.
82. Al efecto, señaló que del contenido de dichos documentos se advertía la totalidad de percepciones por una cantidad de \*\*\*\*\* sin embargo, determinó que dicho sueldo no podía ser considerado para el pago de la jubilación otorgada a la trabajadora, pues para el cálculo de la misma debían tomarse en cuenta solo aquellos conceptos sobre los cuales se hubieran realizado las aportaciones respectivas al Fondo de Pensiones, en términos de lo que dispone el artículo 73 citado.
83. De ahí que aun cuando en éstos se observara una cantidad mayor al monto que por jubilación se le determinó, esas diferencias no podían considerarse para el pago de las diferencias en su cálculo, pues como se advierte de los recibos de pago, los demás conceptos que integraron dicha cantidad corresponden a los pagos relativos a dispensa y prima de antigüedad, los cuales no fueron motivo del sueldo contemplado para realizar las aportaciones al citado fondo.

84. Asimismo, no le asiste la razón al señalar que no era esencial que para decretar un nuevo cálculo de su jubilación, se acreditara que se hicieron previamente las cotizaciones respectivas al Fondo de Pensiones, dado que el Instituto posteriormente podía reclamar cualquier tipo de adeudo en términos de lo que dispone el artículo 65 de la Ley del ISSSTESON.
85. Lo anterior, ya que en el caso, la improcedencia de la rectificación en el pago de su jubilación, no resultó como consecuencia de un indebido pago o adeudos por parte de la Institución educativa al mencionado Instituto, pues como se advierte de los recibos de pago, el cálculo de su jubilación se llevó a cabo de conformidad con los conceptos que efectivamente integraron el sueldo base de cotización (sueldo, complemento y nivel salarial), sobre los cuales se estipuló en los contratos de prestaciones, debían realizarse tales aportaciones al Fondo de Pensiones.
86. Sin que le resulte aplicable el contenido de la tesis 2ª./J. 38/2014 que cita en apoyo, ya que en el caso, no se está en presencia de un indebido registro salarial ante la Institución en términos de lo que dispone en ésta, pues, como ya se dijo, la Universidad efectivamente realizó el pago de las aportaciones a dicho fondo de conformidad con el salario que percibía y sobre el cual se estipuló debían hacerse las respectivas aportaciones al Instituto.
87. En otro apartado de sus conceptos de violación señala que se vulnera su garantía de legalidad debido a que se le aplicó indebidamente el

artículo 73 de la Ley número 38 del ISSSTESON ya que éste sólo se aplica tratándose de pensiones y no a las jubilaciones como en el caso acontece.

88. Que el condicionar el pago de su jubilación, a los sueldos y emolumentos devengados respecto de los cuales se hayan realizado las aportaciones correspondientes, transgrede la garantía de certeza jurídica dado que esto queda supeditado a que un tercero (patrón) haga el pago de sus aportaciones de manera oportuna, dado que los trabajadores son ajenos al proceso de cotización que se lleve a cabo.
89. Además, que el referido artículo no precisa quien será el sujeto obligado de las aportaciones a las que hace referencia pues utiliza dicho término sin precisar si se refiere a las aportaciones patronales o al conjunto de éstas con las cuotas del trabajador. Con lo cual se vulnera el principio de legalidad tributaria al no señalar con exactitud que se debe entender por el término aportaciones a que se hace referencia.
90. Que el citado artículo dispone que solo se deben considerar los sueldos sobre los cuales el trabajador y la dependencia en donde laboró, hayan aportado al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del aludido organismo. Sin embargo, que si en el dictamen de jubilación se indicó que la jubilación era equivalente al “sueldo íntegro”, ello permite deducir que éste consiste en la percepción total del último sueldo devengado por el trabajador como activo, esto es, el correspondiente a la cantidad de \*\*\*\*\*. Además, que debió

considerar que la forma en que se otorgó la jubilación (salario íntegro), no fue motivo de controversia en la litis sino solo sobre los conceptos que debieron servir de base para el cálculo de la misma.

91. Tales argumentos resultan **infundados**.
92. En principio, cabe mencionar que el Diccionario Jurídico Mexicano<sup>12</sup>, define a la jubilación como *“la cesación de toda relación laboral que termina al mismo tiempo cualquier contrato de trabajo vigente y que permite al trabajador acogerse a un régimen de retiro a través del cual obtiene una remuneración mensual vitalicia cuando ha alcanzado una edad límite o ha prestado determinado número de años de trabajo a un patrono, sea persona, empresa, o negociación o el propio Estado.”*
93. Asimismo, señala que por pensión se entiende a la *“retribución económica que se otorga a los trabajadores o empleados públicos al retirarse de sus actividades productivas, ya sea por haber cumplido determinado periodo de servicios o por padecer de alguna incapacidad permanente para el trabajo”*<sup>13</sup>.
94. De las anteriores definiciones es posible determinar que al hacerse referencia a la jubilación debe entenderse como el acto de retiro del trabajador, ya sea por cumplir determinados años de servicio o por edad, mientras que la pensión consiste en el pago mensual que, con motivo de su jubilación, se le otorga al trabajador.

---

<sup>12</sup> Editorial Porrúa, México 1998. P. 1838

<sup>13</sup> Ídem página 2377.



95. Ahora bien, como lo alega la quejosa, el artículo 73 señala que para calcular el monto de la “pensión” a que tengan derecho los trabajadores, se tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos, sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes, esto es, hace referencia a pensión y no a jubilación.
96. Sin embargo, debe mencionarse que la legislación en comento en sus diversos numerales hace alusión tanto al concepto jubilación como al de pensión de manera indiferenciada, dado que la prestación por jubilación lleva implícito el pago que a ésta corresponde. Asimismo, según se aprecia del artículo 68 de la ley citada, en el cual se regula lo relativo a la jubilación, se indica que **“tienen derecho a la pensión por jubilación...”**, esto es, hace referencia al pago que con motivo de la jubilación se hace acreedor el trabajador.
97. Por lo tanto, aun cuando en el artículo en comento no se haga mención precisa al término jubilación sino únicamente al de pensión, éste debe entenderse como el pago que por la prestación de jubilación debe realizar la Institución al trabajador con motivo de su retiro y, en consecuencia, si resulte aplicable dicha disposición al caso concreto que se estudia.
98. De igual manera, debe decirse que la limitación en relación al monto sobre el cual debe calcularse el pago de la jubilación, esto es, con base a los sueldos conforme a los que se haya aportado al Fondo de

Pensiones respectivo, tampoco viola el principio de certeza jurídica pues, como ya se analizó, el monto de las cuotas y de las aportaciones que debe realizar la Universidad se encuentran previamente establecidas en los contratos de prestaciones celebrados entre dicha institución y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que éstas se encontraban claramente definidas.

99. Asimismo, tampoco le asiste la razón al expresar que la falta de aportaciones para lograr el cálculo correcto de su jubilación, se debió, en su caso, a la omisión por parte de la patronal a efectuarlas conforme a su salario real, aunado a que la parte trabajadora no está en facultades de entregarlas.
100. Ello, pues como ya se dijo, en el caso, no existió una falta u omisión por parte de la Universidad de entregar las cuotas y aportaciones que correspondían al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ya que éstas se realizaron de conformidad con lo estrictamente pactado en los contratos de prestaciones celebrados entre las partes, y respecto de las cuales se había comprometido la institución educativa a entregar como contraprestación al Instituto, a fin de que éste le proporcionara a sus trabajadores las prestaciones y servicios de seguridad social a que alude la ley de dicha institución.
101. Por lo tanto, si bien de los recibos de pago aportados por la quejosa, se advierte que como último salario en activo recibió la cantidad

mensual de \*\*\*\*\* se tiene que en éste se incluyen diversos conceptos de pago, sobre los cuales no se pactó que se deberían realizar las aportaciones al Fondo de Pensiones respectivo, y por lo tanto, no pueden ser considerados para efectos del cálculo de su jubilación.

**102.** Asimismo cabe mencionar que si bien no hubo controversia en cuanto a lo indicado en el dictamen en el sentido de que se tomó en cuenta para su pensión el “sueldo íntegro”, también lo es que, como ya se dijo, el “sueldo básico íntegro” que debe tomarse en cuenta para el otorgamiento de su jubilación es precisamente el conformado por sueldo y complemento, en términos de los contratos celebrados entre ambas Instituciones, sin que el hecho de que en el dictamen se haya señalado que se otorgó con el “último sueldo íntegro”, sea suficiente para considerar que el pago debió ser con la totalidad del último sueldo percibido, pues con ello se iría en contra de lo expresamente dispuesto en los contratos, además de que implicaría que el Instituto hiciera el pago de pensiones con base en cantidades que no fueron tomadas en cuenta para cotizar en el Fondo de Pensiones respectivo.

**103.** Por otra parte, la quejosa señala que indebidamente le fue aplicado el artículo sexto transitorio, penúltimo párrafo del Decreto #211 que reformó artículos de la Ley número 38 del ISSSTESON, pues en el dicho de la responsable, al entrar en vigor dicho Decreto contaba con más de 28 años cotizados, por lo que debía recibir su jubilación con base al último salario cotizado; sin embargo, que en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en dicho numeral pues, en la fecha de

su entrada en vigor -30 de junio de 2005- se había cotizado por un periodo menor al ahí indicado -25 años-.

**104.** Dicho concepto resulta **infundado**.

**105.** Lo anterior ya que si bien la responsable aplica el artículo transitorio en mención, sin que la trabajadora se encuentre en la hipótesis aludida, también lo es que en dicho numeral se establece que en el caso de los trabajadores que, al momento de la vigencia de dicha normatividad, contaran con un número menor de años cotizados, recibirán sus jubilaciones con base en el sueldo regulador, esto es, conforme al promedio ponderado de los sueldos cotizados en los últimos diez años según lo dispone el artículo 68 de la citada legislación, el cual le fue aplicado al momento de otorgarle la pensión jubilatoria, según se advierte de la cita del dictamen que obra en autos.

**106.** De ahí que en nada modificaría que la responsable se abstuviera de realizar el señalamiento respectivo, si como ya se analizó, resulta improcedente la solicitud de rectificación de su pensión jubilatoria, dado que ésta se otorgó de conformidad al sueldo íntegro pactado y que se consideró para realizar las aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto de seguridad en comento.

**107.** En otro apartado de sus conceptos de violación señala que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J.41/2009 de la Segunda Sala, pues refiere que conforme a la Ley del ISSSTE vigente hasta el año dos mil

siete, demostrar que un trabajador percibió el concepto “compensación garantizada” no es suficiente para considerar que forma parte del sueldo básico que se utilizará para el cálculo de una pensión o jubilación, por lo que es inaplicable al caso que aquí acontece, dado que los regímenes de pensiones y jubilaciones del ISSSTE y del ISSSTESON son distintos.

**108.** Tal argumento es **infundado**.

**109.** En efecto, no le asiste la razón a la quejosa al exponer que indebidamente se le aplicó la citada jurisprudencia, ya que si bien en ésta se hace referencia a los Trabajadores al Servicio del Estado, dichas diferencias no impiden analizar el caso de los trabajadores regulados por el apartado A, del artículo 123 constitucional, a la luz de lo expuesto en la referida ejecutoria, a fin de determinar cuál es el sueldo que debe contemplarse para efectos del cálculo de la jubilación.

**110.** Lo anterior, ya que debe considerarse que en ambos casos, las pensiones y demás prestaciones en especie y en dinero que pagan los Institutos de Seguridad Social a sus beneficiarios, se deben cubrir con los recursos provenientes de las aportaciones y cuotas que se entregan a las citadas instituciones, con la circunstancia de que dichas prestaciones se determinan con base en cálculos actuariales, por lo que entre el monto que debe pagarse y las aportaciones realizadas debe haber una correspondencia, pues para que el régimen funcione adecuadamente, el monto de las primeras debe ir en

congruencia con las referidas aportaciones y cuotas, si se tiene en cuenta que de tales recursos se obtienen los fondos para cubrirlas.

111. Ello, pues el hecho de que el trabajador perciba diversos montos con motivo de su trabajo, dicha circunstancia no resulta suficiente para considerar que deben formar parte de su sueldo básico integrado para efectos del cálculo de la pensión jubilatoria, ya que para eso deben tomarse en cuenta precisamente las cuotas y aportaciones de seguridad social que se realizaron a la institución encargada de hacerlas efectivas.
112. Así, debe existir una correspondencia entre las cuotas y aportaciones entregadas, con el monto de las pensiones que se otorguen, ya que de tales recursos se obtienen los fondos para cubrirlas, pues considerar lo contrario, implicaría que el pago de las pensiones se realizara con base en montos que no fueron motivo de aportación y, en consecuencia, existiría el riesgo de que al Instituto le fuera imposible financiar el pago de las pensiones, porque carecería de recursos o fondos suficientes para ello.
113. Por lo tanto, aun cuando se trate de supuestos diferentes resulta coincidente el trato que debe hacerse en relación al monto considerado para la integración de la pensión jubilatoria, pues en ambos casos, es necesario corresponder al sueldo respecto del cual se realizaron las aportaciones al Fondo de Pensiones.

114. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo.

115. **SÉPTIMO. Demanda de amparo adhesivo.** En virtud de la determinación adoptada por esta Segunda Sala, se declara sin materia el amparo adhesivo promovido por la Universidad de Sonora, a través de su apoderado legal Gildardo Estrella Álvarez, al haberse negado el amparo principal solicitado.

116. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 134/2014 de esta Segunda Sala<sup>14</sup>, cuyo rubro y texto son los siguientes:

117. **“AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL AMPARO PRINCIPAL SE DECLARAN INFUNDADOS.** *Conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, quien obtenga sentencia favorable a sus intereses puede adherirse al juicio constitucional promovido por su contraparte en el procedimiento natural, expresando los conceptos de violación que fortalezcan las consideraciones del acto reclamado o que expongan violaciones al procedimiento que pudieran afectar sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Ahora, si se toma en cuenta que el amparo adhesivo carece de autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, al seguir la suerte procesal del juicio de amparo principal y, por tanto, el interés de la parte adherente está sujeto a ésta, es evidente que cuando los conceptos de violación del quejoso en el principal se declaran infundados y, en consecuencia, el acto reclamado -que le es favorable al adherente- permanece*

---

<sup>14</sup> Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, página 849.

*intocado, desaparece la condición a que estaba sujeto su interés jurídico y debe declararse sin materia el amparo adhesivo promovido para reforzarlo”.*

118. Por lo expuesto y fundado,

### **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** La Justicia de la Unión **no ampara ni protege** a FRANCISCA SOLIS CASTILLO en relación con la sentencia precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.

**SEGUNDO.** Queda sin materia el amparo directo adhesivo.

**Notifíquese;** con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo Medina Mora I. (ponente). El señor Ministro José Fernando Franco González Salas emitió su voto con reservas.

Firma el Ministro Presidente y Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.

**PRESIDENTE Y PONENTE:**



**MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.**

**SECRETARIO DE ACUERDOS:**

**LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ**

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 8º, 23, 24, fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, vigente a partir del día siguiente, se publica esta versión pública en la cual se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.